

Luis Alejos

EH Bildu, ¿benefactor de pensionistas?

El Correo, 15 de diciembre de 2018.

Las negociaciones presupuestarias entre el Gobierno Vasco y EH Bildu no han prosperado, por lo que el gabinete PNV – PSE tendrá que prorrogar las cuentas. Toca analizar lo tratado y sus consecuencias, si hubiese habido acuerdo. El interés de EH Bildu en apoyar las cuentas era evidente: no las vetaron en el Parlamento Vasco y durante las conversaciones destacados dirigentes de la Izquierda Abertzale se prodigaron en declaraciones y charlas, divulgando su propuesta en materia de pensiones. La oferta inicial suponía complementar las pensiones mínimas hasta 1.080 euros mensuales. Según sus propios cálculos, para financiar esa partida bastaba incrementar los presupuestos de la CAPV en 350 millones. EH Bildu declaraba que esa mejora se podía aplicar por ley, mientras el PNV advertía que una "subida generalizada" deberían reclamársela a Pedro Sánchez.

En efecto, se transfiera antes o después la gestión de la Seguridad Social, el sistema público tendrá caja común y será un modelo de reparto solidario, intergeneracional, e interterritorial. De modo que en el ámbito competencial la propuesta de EH Bildu tenía motivación electoral. Aseguraban que posee encaje normativo, pero en vez de reclamar la pensión mínima de 1.080 euros como derecho y por ley, conforme plantean los pensionistas en sus movilizaciones, lo demandan como complemento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

En la CAPV unas 60.000 personas cobran la RGI. La cuarta parte son pensionistas, sobre todo mujeres. Resultaría difícilmente justificable aprobar un complemento para pensionistas y negárselo al resto. Toda esa gente precisa la ayuda y debería tener el mismo derecho a percibirla. No se beneficiarían ni las 13.000 personas receptoras de la RGI que trabajan en condiciones precarias contribuyendo al pago de las pensiones. Además, la RGI no puede remediar las necesidades de la mayoría de los pensionistas con ingresos limitados. De los 560.000 pensionistas del País Vasco, 180.000 ganan menos de los 732 euros de la actual RGI, pero poco más del 10 % cumple los requisitos para percibir esa ayuda social. La demanda de la Izquierda Abertzale discriminaba a gran parte de los receptores de la RGI y no mejoraba la situación de la mayoría de pensionistas con retribuciones bajas. Además es un acto insolidario con los pensionistas de otros territorios, sabiendo que las cotizaciones de los trabajadores y los impuestos de todo el Estado cubren el déficit de las pensiones del País Vasco.

Las expectativas decaen cuando la propuesta inicial sucumbe ante la lógica del posibilismo. Un titular de prensa lo anunciaba el 1 de diciembre en estos términos: "EH Bildu rebaja casi a la mitad su exigencia para apoyar los presupuestos". Tras reclamar 350 millones para elevar las pensiones mínimas, en una especie de subasta a la inversa baja a 163 millones. De modo que el complemento hasta 1.080 euros quedaría en 858 euros, lejos de la pensión mínima que se reivindica en concentraciones y manifestaciones.

El Gobierno Vasco plantea entonces otra oferta: 783,65 euros en 2019, alcanzando los 822,83 euros en 2020. De esa mejora podrían beneficiarse 40.000 pensionistas, «siempre que cumplan los requisitos para percibir la RGI». EH Bildu estimaba que su propuesta definitiva favorecería a 50.000. Por tanto, uno y otro plan dejan fuera al menos a 130.000 personas con ingresos inferiores a los 732 euros de la RGI, que sólo verán mejoradas sus retribuciones con una subida general de las pensiones públicas. El

Consejero Sr. Azpiazu fija como fecha límite para llegar a un acuerdo el 12 de diciembre. El plazo vence sin que EH Bildu vuelva a mover ficha. La prórroga de los presupuestos resulta inevitable.

La iniciativa de la Izquierda Abertzale no ha funcionado en el plano económico, veamos en el ideológico. En otros tiempos los partidos de izquierda utilizaban la expresión “correa de transmisión” para definir su intervención en las organizaciones de masas. En la actualidad se han invertido los términos: los movimientos sociales, liberados de la tutela de los partidos, intervienen en la política institucional como grupos de presión. La propuesta de EH Bildu, trasladada al movimiento de pensionistas a través de asociaciones afines, supone una vuelta al pasado y entraña una amenaza para la supervivencia del propio movimiento, pues condiciona su pluralidad e introduce reivindicaciones partidistas.

Las aspiraciones soberanistas de la Izquierda Abertzale en materia de pensiones chocan con los intereses tanto de pensionistas como de trabajadores. Pretender implantar un modelo propio implica cuestionar un sistema de pensiones público equitativo y consolidado. La caja común de las pensiones ha soportado los embates de la crisis económica y la degradación del Estado de Bienestar. Las amenazas que acechan a las pensiones son ajenas al propio sistema y se tienen que resolver garantizando derechos. El movimiento de pensionistas no pide ayudas sociales supeditadas a acuerdos entre partidos o a los intereses del gobierno de turno. Reclama una pensión mínima amparada por la ley, que no dependa de los presupuestos anuales.